

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA AL BORDE DEL COLAPSO

La crisis del Poder Legislativo no es un fenómeno nuevo, pero su agravamiento es uno de los problemas más graves de la vida política nacional.

A los partidos Liberación Nacional y Unidad Socialcristiana esta situación les importa muy poco o nada. Esas maquinarias electorales, gigantescos aparatos buenos sólo para el electorerismo, ya no hacen política ni se interesan por los grandes problemas nacionales. Su objetivo es conseguir votos y legitimar así la acción del bloque formado por la oligarquía y los representantes de las empresas transnacionales. Para eso, por ahora, basta con engañar al pueblo, el pensamiento político ha sido sustituido por la demagogia y su corolario, la corrupción.

La política real se hace en otra parte: en las cámaras patronales, en los medios, de información, en los círculos financieros, en los conciliábulos de los que dominan la bolsa de valores y los bancos privados o de los representantes de empresas extranjeras. La «política costarricense» se diseña en las directivas de monopolios extranjeros o en reuniones de «ejecutivos» del Banco Mundial, del FMI o en los oscuros laberintos de la CIA.

Estas fuerzas políticas, como es evidente, están interesadas en debilitar al Estado, entienden que en la actual correlación de fuerzas, cuanto más débil sea el Estado, mayor será su fuerza. Al Poder Ejecutivo, tras la máscara de la reestructuración, lo están convirtiendo en un simple gendarme, para vigilar los intereses de los grandes empresarios. El Poder Judicial, hijastro de las mayorías parlamentarias, con algunas y respetables salvedades, no logra ver más allá de las narices de los líderes de turno. Pero el blanco principal es la Asamblea Legislativa. Este cuerpo está totalmente desacreditado, en parte por la acción de los propios diputados, también con algunas y respetables salvedades; los periódicos y otros medios de información echan leña al fuego del descrédito. Cada error es magnificado hasta darle una dimensión planetaria. Las aberraciones morales como la apropiación de dineros de partidas específicas o la falsificación de documentos para aumentarse los salarios, sirven al mismo propósito.

Es así como se está delineando la «Reforma del Estado», a la medida de los intereses de la derecha y de los grandes intereses económicos, nacionales y extranjeros. Es claro que no se trata de tener un Estado eficiente y honrado. Al contrario se trata de alcanzar un Estado carente de poder y por lo mismo inerme frente a la corrupción privada que hace palidecer a la pública.

Para consolidar este propósito necesitan mantener a la Asamblea Legislativa al borde del colapso. Precisamente por eso tanto liberación como la Unidad Socialcristiana obstaculizan todos los intentos de mejorar el procedimiento legislativo.

Pruebas al canto. No ha sido posible por la oposición de la derecha dominante cambiar los sistemas de elección de los

diputados. No se trata, decimos tangencialmente, simplemente de cambiar el método de escogencia de los candidatos. Esto no es una solución, lo que puede tener significación real es que se cambie el sistema de elección de los diputados. La elección tiene que basarse, en primer lugar, en el conocimiento que los electores tengan de los candidatos y para lograrlo las elecciones parlamentarias deben separarse de las presidenciales, la elección debe hacerse por circunscripciones más pequeñas que las provincias. Y muy importante, es que los electores tengan la posibilidad de remover a los diputados que no cumplan con sus deberes. Debe sancionarse el ausentismo con la pérdida de la credencial.

Pero aún todo esto sería inútil si no se introducen profundos cambios en el Reglamento. Los dirigentes de los partidos dominantes hablan de la necesidad de modernizar el parlamento, pero llegada la hora no están dispuestos a ir más allá de la utilización de «computadoras». El Reglamento y la Constitución necesitan cambios profundos. No es este el momento de exponer nuestras ideas sobre algunos de esos cambios, pero sí para decir que no existe voluntad para reformar ese Reglamento. Desde hace quince años, cada nueva asamblea nombra una comisión para reformarlo, pero nunca se ha podido incluir reformas fundamentales. Hay una oposición muy fuerte aunque velada.

Sobre la patria está pendiendo, por acción de la política burguesa, el peligro de las soluciones al estilo Fujimori. Es posible que algunos partidos pasen a segundo plano y sean sustituidos por fuerzas políticas autoritarias y abiertamente antidemocráticas. Este es el peligro que hay que evitar con la acción mancomunada de los movimientos populares, verdaderamente democráticos.

La Asamblea Legislativa, así como toda la sociedad costarricense, es víctima de un bipartidismo entreguista y reaccionario. Las fuerzas que dominan estos partidos son incapaces de resolver los problemas nacionales, son incapaces de una transformación profunda del Estado, son incapaces de garantizar el desarrollo económico e incapaces de garantizar democracia y justicia social.

Es por eso cada vez más evidente la necesidad de que surja una fuerza alternativa, democrática y transformadora; frente a una posibilidad de tal envergadura los jueguillos electorales, las zancadillas de algunos sectores de la izquierda, resultan absolutamente irresponsables.

Vanguardia Popular es la única organización que hasta ahora ha dado a conocer un programa alternativo. Como lo han dicho reiteradamente sus dirigentes, este programa es un aporte a la elaboración de una estrategia de verdadera unidad popular contra el proyecto neoliberal, cuya faceta más visible es la económica, pero lo más peligroso son sus consecuencias sociales y políticas.